



RELACIONES PELIGROSAS: ESTADO Y GUERRA EN AMÉRICA LATINA

Antonio Mitre

Working Paper n° 7, Julio de 2010



Relaciones Peligrosas: Estado y Guerra en América Latina

Antonio Mitre

I. Introducción

Desde la gestación del pensamiento político moderno, Estado y Guerra estuvieron implicados en una relación de reciprocidad causal que, hasta hoy, se configura en la literatura sobre el tema como un juego de espejos. Maquiavelo fue el primero en formular, en el capítulo XII de *El Príncipe*, el carácter especular de ese vínculo y el problema metodológico implícito:

Las principales bases que tienen los Estados, sean ellos nuevos, viejos o mixtos, son buenas leyes y buenas armas. Y como no pueden existir buenas leyes donde no hay buenas armas, y donde hay buenas armas conviene que existan buenas leyes, me referiré tan solamente a las armas.¹

Cuatro siglos después, arraigará la idea de que el monopolio de la violencia legítima es un elemento esencial en la definición del Estado moderno, cuyo nacimiento y consolidación se deben tanto a las armas, como éstas a las vicisitudes de aquél: “Estados hacen guerras y guerras hacen Estados”, reza una conocida sentencia.² Se trata, pues, de una ecuación en la cual ambos términos aparecen umbilicalmente unidos, por lo que conviene separarlos analíticamente, como recomienda el escritor florentino, para evitar la reflexividad a la hora de determinar el peso que le cabe a cada uno en la producción de acontecimientos y procesos específicos. En la fórmula citada se esconde otro desafío: establecer las condiciones bajo las cuales se daría esa articulación causal, así como sus límites, puesto que guerras no producen Estados siempre, ni éstos surgen únicamente a través de guerras. Están colocados, ahí, los problemas y dilemas en torno a los cuales discurre el presente trabajo que tendrá como foco los países latinoamericanos.

Las teorías clásicas sobre el tema que nos ocupa tuvieron como referencia el examen de la génesis, formación y trayectoria de los Estados europeos.³ Esa literatura deja claro no solamente el hecho de que el propio concepto de Estado moderno resulta impensable sin el de guerra, sino también que la experiencia bélica determina, en buena medida, todos los elementos responsables por su constitución y consistencia internas: estructuras de autoridad, capacidad administrativa, legitimidad y niveles de inclusión.⁴ Desde ese ángulo, el acento en el impacto devastador de las guerras se compensa con ponderaciones relativas a su “poder constructivo”: guerras exigen toda clase de recursos humanos y materiales que solamente nuevas formas de organización política pueden atender. De ese modo, ellas contribuyen a la centralización del poder y al desarrollo de la base institucional del Estado, dotándolo de una máquina administrativa más amplia, compleja y eficiente. Conflictos bélicos también

¹ Maquiavelo, 1991, p. 49.

² Centeno, 2002, p. 102.

³ Por ejemplo: Weber, Finer, Best y Tilly.

⁴ Centeno, 2002, p. 15.

estimulan la creación y difusión de tecnologías, promueven el espíritu nacional, la movilización e incorporación social y política de amplios segmentos de la población. En síntesis, las guerras cumplen un papel decisivo en la configuración del Estado moderno, entendido éste como un núcleo de autoridad política centralizada, con capacidad efectiva de controlar, integrar y proteger su población y territorio.⁵ El corolario de ese proceso de largo alcance sería la disminución de la violencia interna, aunque no necesariamente de los conflictos armados entre los propios Estados, los cuales, por el contrario, tienden a aumentar con el pasar de los siglos (anexo 1). La antigua tesis de Hobbes alude al carácter bifronte de esa condición: el pacto resuelve el problema de la guerra civil dentro de los territorios controlados por los respectivos Estados, pero, con relación al escenario externo, lo mejor que se puede hacer es apuntar los cañones hacia la frontera.

América Latina, hasta hace poco recordada tan sólo para señalar desvíos con relación al modelo fijado por las grandes teorías, pasó a ser vista, en las últimas décadas, como un vasto laboratorio para probarlas, revelar sus deficiencias y, por qué no, generar nuevas hipótesis. Sobre la cuestión que nos interesa – las relaciones entre Estado y Guerra –, la trayectoria de la región es aún más atractiva, una vez que, en todos los aspectos substantivos, ella se muestra como el perfecto reverso de las tendencias que se verifican en otras áreas del planeta.⁶ En primer lugar, América Latina sorprende por la inmutabilidad de su escenario estatal, caracterizado, con apenas una excepción, por la ausencia de fracturas territoriales que hayan dado origen a la formación de nuevas soberanías. De hecho, la actual familia de estados latinoamericanos es prácticamente la misma que se configuró a lo largo de la primera mitad del siglo XIX – fenómeno que contrasta con lo que se observa en el Viejo Continente, cuyos mapas deben ser rediseñados en razón de los procesos separatistas y nacionalistas de variada índole que lo transforman periódicamente. En la región americana, si bien ocurrieron frecuentes desplazamientos de fronteras, con transferencias, forzadas o negociadas, de franjas territoriales de un Estado a otro, los enfrentamientos provocados por conflictos internacionales, guerras civiles, levantamientos indígenas o movimientos regionalistas no redundaron en la extinción de soberanías ya constituidas, ni en la emergencia de nuevas entidades políticas. En suma, la división política de América Latina es hoy substantivamente la misma que se materializó una vez terminadas las guerras de Independencia. De los veinte países existentes en la actualidad, dieciocho se constituyeron como Estados soberanos en la primera mitad del siglo XIX, Cuba se independizó de España en 1898, y Panamá se desprendió de Colombia en 1903.

⁵ Tilly, 1992, p.100-3.

⁶ Meses después de publicar, en 2008, mi ensayo *Nosotros que nos queremos tanto. Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso boliviano*, mientras realizaba una investigación para el presente trabajo, tomé conocimiento de la obra de Miguel Ángel Centeno, *Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America*, publicada en 2002. En dicho estudio, el autor parte de la misma paradoja en torno de la cual había elaborado yo algunos de mis argumentos sobre la trayectoria del Estado en América Latina, vale decir, su frágil constitución interna, manifiesta, sobre todo, en los niveles de violencia doméstica y, al mismo tiempo, la relativa paz exterior que ha gozado el continente a lo largo de los dos últimos siglos, plasmada por un número pequeño y decreciente de guerras entre los países de la región. La paradoja, tácitamente reconocida, aunque poco problematizada, por la historiografía tradicional, salta a la vista de cualquiera que tenga como foco de reflexión las relaciones entre Guerra y Estado en el ámbito latinoamericano. La idea de que la trayectoria estatal latinoamericana es casi el perfecto reverso de la que se constata en otras regiones está en la base de las similitudes existentes entre mi trabajo y el de Centeno y de otros autores respecto a varias analogías y algunos argumentos, aunque en la explicación de las causas existan diferencias importantes que serán señaladas en este texto. De todas formas, si bien lamente no haber podido aprovechar, en aquella ocasión, el sistemático y bien fundamentado estudio de Centeno, por otro lado, quedo reconfortado al constatar que varias de las ideas centrales que yo había formulado sumariamente en mi ensayo encuentran sustentación conceptual y empírica en su obra.

Pues bien, uno de los factores que contribuyó para afianzar esa estabilidad fue justamente el número pequeño y decreciente de guerras entre los Estados latinoamericanos durante los siglos XIX y XX. No se trata de pasar por alto las varias y devastadoras contiendas internacionales en las cuales participaron los países de la región, sino tan sólo señalar una tendencia por fortuna declinante y opuesta a la que se verifica en otras áreas del globo durante el mismo arco temporal.⁷ Efectivamente, de los 42 conflictos armados que ocurrieron en América Latina en el siglo XIX, sólo 7 lo fueron entre países de la región, 25 se refieren a incursiones de tropas o guerras realizadas por Estados Unidos, y otros 10 a intervenciones o enfrentamientos armados que fueron iniciados por países europeos (anexo 2). Sin embargo, cuando se amplía el marco temporal y se contabilizan únicamente los conflictos calificados como guerras internacionales *stricto sensu* – por tanto, sin incluir aquellos que hicieron parte del proceso de emergencia de los Estados, ni los bloqueos o las numerosas intervenciones norteamericanas en la América Central y el Caribe – se verifica, entonces, que hubo en América Latina, a lo largo de los siglos XIX y XX, un total de veinte y tres contiendas bélicas, de las cuales once involucraron potencias extranjeras contra países de la región: los Estados Unidos participaron en dos de ellas, contra México y contra España; y los países europeos en siete, de las cuales cuatro fueron promovidas por España en la tentativa de retomar o preservar sus colonias, una por Francia, otra por una alianza de países europeos y, en el único acontecimiento de ese tipo en el siglo XX, Inglaterra enfrentó a Argentina en las Malvinas. A lo largo de esos dos siglos, el número de guerras entre países latinoamericanos llegó a 12: siete ocurrieron en el siglo XIX y cinco en el XX y, de todas ellas, sólo tres pueden considerarse grandes, en función de la participación de ejércitos convencionales, impacto territorial, tiempo de duración y número de víctimas: la de la Triple Alianza, la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco, la única de magnitud considerable en la pasada centuria (cuadro 1). Otro aspecto que cabe destacar en el panorama bélico de la región es que Argentina, Brasil y México – las mayores “potencias”, tanto por su peso militar, demográfico y económico, como por su gravitación geopolítica – no estuvieron en guerra contra ningún Estado latinoamericano en los últimos 100 años, mientras que Paraguay y Bolivia, países menores, participaron, cada uno separadamente o enfrentándose entre sí, en dos de los tres conflictos armados de mayor envergadura: Triple Alianza (Paraguay), Guerra del Pacífico (Bolivia) y Guerra del Chaco (Bolivia y Paraguay).

Cuadro 1

Guerras en América Latina, 1830-2000

Guerras	Países involucrados en el conflicto	Año
Guerra España-México	México, España	1829
Guerra Grande	Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Gran Bretaña	1836-51
Confederación Perú-Boliviana	Bolivia, Chile, Perú	1836-9
Guerra de los Pasteles	México, Francia	1838
Guerra Perú-Boliviana	Perú, Bolivia	1841
Guerra México-Estados Unidos	México, Estados Unidos	1846-8
Reocupación de Santo Domingo	España, República Dominicana	1861-5
Intervención de México	Francia, Gran Bretaña, España	1861
Guerra Franco-Mexicana	México, Francia	1862-7
Ecuador-Colombia	Ecuador, Colombia	1863
Guerra Perú-España	España, Perú	1864-6
Guerra de la Triple Alianza	Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay	1864-70

⁷ Tilly, 1992, p. 165-6.

Invasión española	Bolivia, Chile, Perú, España	1865-6
Guerra del Pacífico	Bolivia, Chile, Perú	1879-83
Centroamericana	Guatemala, El Salvador	1885
Independencia de Cuba	Cuba, España, Estados Unidos	1895-8
Guerra del Acre	Bolivia, Brasil	1899-1904
Centroamericana	Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua	1906-7
Guerra del Chaco	Bolivia, Paraguay	1932-5
Leticia	Perú, Colombia	1932-3
Disputas fronterizas	Perú, Ecuador	1932-95
La guerra del fútbol	El Salvador, Honduras	1969
Guerra de las Malvinas	Argentina, Inglaterra	1982

Fuente: Centeno, 2002, p. 44.

II. Guerras entre países latinoamericanos: causas y consecuencias

Todos los conflictos armados entre países latinoamericanos, exceptuando el de la Triple Alianza, han sido calificados como “guerras limitadas” en razón de algunas características básicas: (a) acontecieron en regiones distantes de los núcleos de mayor concentración poblacional; (b) no acusaron motivación ideológica, sino más bien el alcance de objetivos económicos puntuales; (c) involucraron ejércitos de mediano o pequeño porte con soldados reclutados generalmente entre las clases bajas; (d) no exigieron movilización general de las respectivas sociedades y, en muchos casos, fueron “ignorados por el ciudadano común” – vale decir, por las clases altas y medias.⁸ En prácticamente todos los casos, los enfrentamientos armados fueron precedidos por litigios en torno a la definición de fronteras territoriales y, en ese sentido, las guerras de los siglos XIX y XX no hacen sino reproducir la pauta de pendencias latentes desde la fundación de los Estados. Aun así, las disputas por cuestiones limítrofes que desembocaron en guerra abierta fueron relativamente pocas: un 5% solamente contra 62% en Europa.⁹

Dentro de ese marco de referencia existen gradaciones importantes, desde las contiendas confinadas a regiones de frontera, con bajas reducidas y consecuencias poco expresivas a nivel nacional, hasta los enfrentamientos que movilizaron considerables recursos materiales y humanos, provocaron considerable número de víctimas, dejaron marcas profundas en las sociedades y, en general, modificaron la estructura de los Estados beligerantes.

Guerras menores

Entre los acontecimientos bélicos de intensidad y amplitud limitadas, cabe mencionar, por ejemplo, la disputa entre Perú y Colombia, en 1932, por el control del “Trapecio de Leticia”, en la selva amazónica. Allí murieron unas 200 personas en combate, y otras mil por enfermedades y condiciones sanitarias de la región. El pleito fue arbitrado por la Liga de las Naciones que decidió ratificar el Tratado de 1922, transfiriendo definitivamente a

⁸ La guerra total se caracterizaría por: (a) creciente letalidad en los campos de batalla, (b) expansión de las áreas de combate que comprenden no solamente centenares de kilómetros de fronteras, sino también blancos civiles; (c) asociación con formas de cruzada moral o ideológica que contribuyen a demonizar al enemigo; (d) participación de parcelas significativas de la población, sea en combate directo o en actividades de apoyo; (e) militarización de la sociedad, cuyas instituciones sociales se orientan, cada vez más, en sentido del éxito militar y son evaluadas por su contribución al esfuerzo bélico, Centeno, 2002, p. 21.

⁹ Centeno, 2002, p. 69.

Colombia el territorio en litigio.¹⁰ La trayectoria de ese conflicto, que se arrastró intermitentemente por décadas, es común a varios otros, cuyas causas remontan a la indefinición de las fronteras nacionales, poco conocidas en el siglo XIX, e imprecisamente delineadas en los tratados celebrados a lo largo del siglo XX. Fue lo que ocurrió en el rosario de querellas que protagonizaron Ecuador y Perú en 1941, 1981 y 1995 por el control del territorio adyacente a la parte navegable del río Marañón – una franja de menos de 60 millas cuadradas. En el último incidente (1995), el motivo aludido por Ecuador para enviar tropas a la región fue que la comisión creada por el Protocolo de 1942 para proceder a la demarcación de la frontera no había concluido sus trabajos, dejando mal definidas las coordenadas geográficas de la parte superior del valle del Cenepa. Los contingentes armados de ambos lados que, de hecho, alcanzaron el teatro de operaciones en aquel año, sumaban 5.000 hombres; Ecuador perdió 100 personas y Perú 400, hasta que los dos países, con la mediación de cuatro Estados garantes – Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos –, firmaron la Declaración de Itamaraty el 17 de marzo de 1995 y, finalmente, el Acuerdo Definitivo de Paz el 26 de octubre de 1998.¹¹

En esa misma línea de conflictos, aunque con un costo territorial mucho mayor, se sitúa la Guerra del Acre, cuyo origen se debe tanto a la indefinición de límites como a la importancia económica que adquirió la región, a fines del siglo XIX. En esa época, migrantes brasileños, atraídos por el auge de la goma, se asentaron en territorio boliviano al margen del río Acre. La decisión del gobierno de Bolivia de establecer una aduana para efectuar la recaudación de impuestos sobre la exportación de la goma motivó un levantamiento armado, liderado por Galvez que, en 1899, proclamó el Estado Independiente del Acre. Inicialmente, Bolivia y Brasil actuaron de común acuerdo para reprimir la insurrección, hasta que ese último país entendió que sus intereses estarían mejor servidos declarando en litigio el territorio en cuestión. La intervención oficial del gobierno brasileño se dio en 1902, bajo la justificativa de que la decisión, por parte de Bolivia, de arrendar el territorio a una sociedad anglo-estadunidense comprometía la soberanía de toda la región. Dividida por una guerra civil y con enorme dificultad de desplazar sus tropas hasta zonas tan distantes, el gobierno de Bolivia no consiguió defender ese territorio. Por el Tratado de Petrópolis de 1904, el país perdió 190 mil kilómetros cuadrados para Brasil y, a guisa de compensación, recibió 2 millones de libras esterlinas y el compromiso de que sería construida una ferrovía, la línea Madera-Mamoré.¹²

Grandes guerras

Las tres grandes guerras de los siglos XIX y XX se diferencian nítidamente de las mencionadas anteriormente por la intensidad y duración, así como por el impacto generalizado que tuvieron sobre los países involucrados. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay fue, de todas, la más letal y devastadora, y la que más se aproximaría, según Centeno, a la noción moderna de guerra total.¹³ Sus orígenes remontan a la formación de una compleja trama de intereses ínter oligárquicos, desde que la cuenca del Plata se convirtió, en la segunda mitad del siglo XVIII, en área estratégica para el comercio, y foco de intenso conflicto político. La expectativa de que la Independencia de Uruguay, reconocida en 1828, se constituyese en una pieza clave para la preservación del equilibrio regional quedó luego comprometida por las redes de alianzas familiares, militares, políticas y de negocios, las

¹⁰ En 19 de junio de 1934. Fue la primera vez que la Liga intermedió querellas en el hemisferio occidental, Scheina, 2003, p. 113.

¹¹ Cannabrava, s/d.

¹² Mesa, Gisbert; Mesa Gisbert, 1997, p. 486.

¹³ Centeno, 2002, p. 56.

cuales, estructuradas durante la larga fase anterior, pasaban ahora a conectar distintos grupos oligárquicos de Brasil y de Argentina con las respectivas facciones políticas del Uruguay: el Partido Blanco y el Partido Colorado. Este último mantenía vínculos estrechos con miembros del Partido Liberal de la provincia brasileña de Río Grande do Sul, constituido por ex-Farroupillas o descendientes de la lucha separatista de 1835-45.¹⁴ Debido a esa circunstancia, las disputas políticas trabadas en la Banda Oriental tendían a “internacionalizarse” rápidamente, con lo cual los gobiernos de Montevideo quedaban expuestos a las maquinaciones geopolíticas de las “potencias” vecinas.

Al Brasil le interesaba mantener su influencia sobre Uruguay y Paraguay, de modo a asegurar el libre tránsito de los ríos para la Provincia de Mato Grosso. Al Paraguay, cuyo comercio exterior dependía de vías fluviales parcialmente controladas por Argentina y Brasil, la preservación del equilibrio entre esos dos antiguos rivales le era tan esencial para su sobrevivencia cuanto sustentar, como objetivo categórico de su política externa, la autonomía de su aliado natural, Uruguay, sometido a las mismas presiones por parte de sus poderosos vecinos. Por eso también, desde la formación del Estado paraguayo, su ejército, distintamente de la mayor parte de los países latinoamericanos, se organizó para actuar más en guerras interestatales que en luchas domésticas.¹⁵

En 1863, el gobierno de Uruguay, en manos del Partido Blanco, procuraba controlar la insurrección desatada por los Colorados que, entonces, contaban con soporte político y militar de Brasil. Para el régimen de D. Pedro II, la perspectiva de una guerra, además de estimular el nacionalismo, significaría un respiro, dado el acoso de que era objeto el sistema esclavista por parte de la opinión pública internacional, más aún en los meses que se siguieron a la Proclama de Emancipación, hecha por Lincoln en Estados Unidos.¹⁶ En fin, cuando el ejército brasileño cruzó la frontera para apoyar la rebelión encabezada por Venancio Flores, del Partido Colorado, Paraguay respondió con la captura, en el río Paraguay, del barco brasileño “Marqués de Olinda” e hizo rehén al gobernador de Mato Grosso, en noviembre de 1864 –episodio que daría inicio a las acciones bélicas. Un mes después, las fuerzas paraguayas invadieron esa provincia y, acto seguido, el gobierno solicitó licencia de paso por territorio argentino para mejorar la posición de su ejército.¹⁷ A pesar de la negativa del gobierno de Mitre, Francisco Solano López decidió ingresar en la provincia de Corrientes, apostando en el apoyo de Urquiza y en un posible rompimiento del caudillo con el gobierno de Buenos Aires, nada de lo cual sucedió. Al contrario, la incursión paraguaya provocó la entrada de Argentina en la contienda al lado del Brasil. Los ejércitos aliados sumaban aproximadamente 170.000 hombres. Brasil movilizó una fuerza armada equivalente a 1,76% de su población total, o sea, un quinto de lo que representó, en la misma época, la movilización para la Guerra Civil en Estados Unidos: 2,5 millones de personas en una población de 33 millones de habitantes. Paraguay movilizó prácticamente toda su población adulta y, al iniciarse el conflicto, el ejército de ese país contaba con 60.000 combatientes.

Enfrentamiento tan desigual en recursos humanos y materiales sólo podía tener un corolario. Sin embargo, la guerra duró cinco años, fundamentalmente por la obstinación de Solano López y por la bravura de los paraguayos. Los costos humanos fueron devastadores para ese país, que perdió 96% de su población masculina y 75,75% de su población total. En otras palabras, de los 800.000 habitantes que Paraguay tenía en 1862, aproximadamente 606.000

¹⁴ Bushnell; Macaulay, 1994, p. 252.

¹⁵ López-Alves, 2001, p. 158.

¹⁶ Bushnell; Macaulay, 1994, p. 252.

¹⁷ Donghi, 1975, p. 248.

murieron en consecuencia de la guerra; Brasil sufrió 33.000 bajas, vale decir, 0,4% de su población de 8,5 millones de habitantes, y Argentina unas 20.000, o 1,6% de su población que, entonces, era de 1.250.000 habitantes (cuadro 2).¹⁸

Cuadro 2

Porcentaje de víctimas fatales del lado paraguayo con relación a su población total en la guerra de la Triple Alianza

Hombres con relación a la población total	48,25%
Hombres con relación a la población masculina	96,50%
Mujeres con relación a la población total	27,50%
Mujeres con relación a la población femenina	55,00%
Proporción de muertos en la guerra con relación a la población total	75,75%

Fuente: Chiavenatto, 1993, p. 151.

La destrucción provocada por las acciones bélicas puso en riesgo la propia existencia de Paraguay, y lo excluyó del mapa geopolítico del Plata.¹⁹ La reconstrucción del país en la posguerra se hizo con una orientación económica que era el reverso del anterior sistema, vale decir, bajo el signo de la gran propiedad privada y de la apertura al capital extranjero. La dependencia con relación a Argentina, a través de cuyo sistema fluvial hacía su comercio exterior, acabó por consolidarse, así como la ascendencia de esa república como mercado consumidor de sus productos. En el transcurso de los años, la guerra configuró el *ethos* nacional y el nacionalismo paraguayos como no lo hizo ningún otro evento bélico en cualquier país latinoamericano.

El impacto de la Guerra Grande es menos perceptible en el caso uruguayo; ella alentó una suerte de modernización por la vía prusiana promoviendo, bajo la égida del caudillismo militar, una alianza entre los intereses del comercio exportador y de los hacendados. El resultado fue el fortalecimiento del Estado, la consolidación del centralismo y un aumento de la represión sobre la fuerza de trabajo en el campo. Las consecuencias para Brasil fueron de monta y, casi todas, insospechadas. Por un lado, las demandas de la guerra estimularon la mejoría de su infraestructura, a través de la apertura de nuevas carreteras y líneas telegráficas en las provincias del sur, así como la expansión de su industria textil. Por los términos del acuerdo de paz firmado en la Conferencia de Buenos Aires (1876), Brasil se quedó con la región entre los ríos Apa y Blanco, expandiendo, así, la frontera meridional de Mato Grosso, mientras que Argentina recibió el territorio de Misiones y la zona conocida como Chaco Central (Formosa).²⁰ Por otra parte, el esfuerzo bélico, sustentado materialmente por cuantiosos empréstitos, y, en los campos de batalla, por las capas más desfavorecidas de la población, incluido un gran número de esclavos, profundizó la crisis social y fiscal, y aceleró el fin de la esclavitud y del régimen imperial y, por último, acentuó la dependencia de la economía brasileña con relación al capital inglés, el cual, al expandirse por todos los países de la región, acabó por ser el gran favorecido al terminar la contienda. La tarea de identificar los beneficios colectivos de cualquier guerra tiene un sabor de cálculo macabro; sin

¹⁸ Hay mucha divergencia y polémica con relación al número de muertos, Bushnell; Macaulay, 1994, p. 254. Consultar también:

<http://www.rs.ejercito.mil.ar/Contenido/Estructura/Nro649/Revista/histomilitar.htm>

http://www.cdcoex.eb.mil.br/Arquivos%20em%20PDF/Guerra_do_Paraguai.pdf

¹⁹ Donghi, 1975, p. 247.

²⁰ Koshiba; Pereira, 1992, p. 114.

embargo, es posible que la de la Triple Alianza, hasta por el tiempo y costos involucrados en ella, haya alejado de una buena vez la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las dos potencias del Atlántico suramericano: Brasil y Argentina.

Finalmente, una cosa fue la guerra y otra, más mutable e incierta, lo que la historiografía hizo de ella. En este caso, las interpretaciones fueron variando en función del tiempo y de las historias nacionales. La fórmula Civilización y Barbarie, de fuerte carga referencial y sentido explícito en aquella época, fue utilizada por las élites victoriosas para presentarse como defensoras de un ideario de dimensiones supranacionales, y justificar los conflictos bélicos como episodios inevitables en la magna tarea de insertar la América bárbara en la modernidad Occidental. Entre los gobiernos aliados, promotores de la historia oficial, la exégesis que fue moneda corriente durante mucho tiempo vio en la ambición desmedida de López la causa del conflicto, y entendió su corolario como el triunfo de la civilización y de la democracia sobre el sistema bárbaro y despótico que mantenía subyugado al pueblo paraguayo.²¹

La Guerra del Pacífico (1879-1884), si bien de menor intensidad que la de la Triple Alianza, es de todos los conflictos entre los Estados latinoamericanos el de mayor transcendencia temporal. Las numerosas tentativas de solucionarlo por vía diplomática han sido, hasta el momento, otros tantos fracasos. En su gestación, se verifica una pauta común a otros acontecimientos bélicos en la región: primero, los territorios que serán objeto de disputa se sitúan en regiones fronterizas, donde los Estados, bajo cuya jurisdicción se encuentran inicialmente, acusan débil presencia institucional; segundo, el descubrimiento de uno o más productos de exportación, altamente lucrativos en razón de su renta diferencial, modifica vertiginosamente la condición marginal de esos territorios; tercero, se produce una rápida “internacionalización” del espacio por la convergencia de personas y capitales de varias nacionalidades; cuarto, los conflictos de naturaleza socioeconómica derivan en litigios territoriales y, finalmente, en enfrentamiento armado.

En la Guerra del Pacífico convergieron motivaciones de carácter geopolítico y económico, así como aspectos relacionados con el proceso de modernización de los países involucrados – Chile, Perú y Bolivia. Entre las primeras, cabe mencionar, como antecedente más próximo, el conflicto armado que envolvió esos tres países de 1836 a 1839. En aquella ocasión, la causa inmediata fue la unión territorial y política de Perú y Bolivia, arquitectada por Andrés de Santa Cruz, la cual fue vista por Chile como una amenaza a su posición en el Pacífico sudamericano. El gobierno chileno declaró guerra a la Confederación y, con una fuerza de 5.400 hombres, bajo el comando de Manuel Bulnes, derrotó al ejército peruano-boliviano en la batalla de Yungay en 1839.²² La victoria le dio a ese país la fama de “Prusia” de la región, y reforzó la institucionalidad política del país y el control civil de las Fuerzas Armadas.²³ Poco después de aquella guerra, se descubrieron importantes depósitos de guano y de salitre

²¹ Sin embargo, desde el comienzo de la Guerra del Paraguay hubo en Argentina intelectuales y caudillos regionales que criticaron las motivaciones del conflicto armado y lo calificaron de guerra fratricida; condenando abiertamente al gobierno y denunciando el nacionalismo ufano, predominante en la visión brasileña. Por eso, y por la mayor participación del Brasil en el esfuerzo bélico, el revisionismo historiográfico fue más urgente allí que en Uruguay o Argentina, donde, desde la época de la contienda, hubo una vertiente crítica que se inició con Alberdi, continuó con José Hernández, Felipe Varela, Ricardo López Jordán, y se extendió en las obras de renombrados historiadores contemporáneos como Halperín Donghi.

²² Mesa, Gisbert; Mesa Gisbert, 1997, p. 352

²³ Centeno, 2002, p. 57.

en el desierto de Atacama, entonces bajo soberanía boliviana. En la década de 1840, el gobierno de ese país firmó numerosos contratos con empresarios chilenos, norteamericanos e ingleses para explotar el potencial económico de la región. Entre 1842 y 1849, se explotaron 53 mil toneladas de fertilizantes, o un promedio de 7.500 toneladas por año y, así, el desierto, considerado como uno de los más áridos del planeta, comenzó a suministrar los productos – guano y salitre – que irían a fecundar otras tierras.²⁴ En razón de la importancia económica que asumió el Atacama, el presidente boliviano, Mariano Melgarejo, fundó el Departamento del Litoral, con aproximadamente 120 mil kilómetros cuadrados y, al mismo tiempo, intensificó la concesión de licencias de explotación a capitalistas nacionales y extranjeros. El capital chileno se incorporó rápidamente a esas actividades, y su proyección hacia el norte fue acompañada por una significativa migración de trabajadores de ese país, los cuales se asentaron gradualmente en territorios que pertenecían a Bolivia (Atacama) y al Perú (Tarapacá). Al mismo tiempo, la expansión hacia el Norte ponía al descubierto el frágil fundamento de la industria chilena, incapaz de revertir, en el interior, el declino que experimentaba la producción de cobre y de plata, en razón de la caída de los precios y del agotamiento de los minerales más ricos. La afluencia de trabajadores, provenientes, sobre todo, de Copiapó, se intensificó en la década de 1870 debido al descubrimiento de riquísimos depósitos de mineral argentífero en Caracoles, en el Atacama boliviano, hacia donde se dirigieron también numerosos empresarios chilenos (cuadro 3).

Cuadro 3

Transferencias de las propiedades mineras en Caracoles, por nacionalidad

1871-1872

Chileno a chileno	233
Chileno a boliviano	21
Chileno a otras nacionalidades	30
Boliviano a chileno	14
Boliviano a boliviano	34
Boliviano a otras	7
Otras a chileno	26
Otras a bolivianos	8
Otras a distintas nacionalidades	10

Fuente: Bravo (manuscrito).

En poco tiempo, el Departamento del Litoral llegó a tener 20.000 personas, la gran mayoría de origen chileno, y el distrito de Caracoles 5.000 habitantes, de los cuales 80% chilenos.²⁵ En 1874, la población de Antofagasta, el puerto boliviano más importante de la región, a través del cual se exportaba salitre y plata de Caracoles, era 93% chilena, y su influencia en todas las esferas – social, económica y cultural – tan arrasadora que el alcalde de Atacama, Manuel Othon Jofré, en un esfuerzo por proteger la soberanía de su país sobre ese territorio, procuró, sin éxito, socializar a los extranjeros en las festividades y símbolos patrios de Bolivia.²⁶ El sur peruano sintió, igualmente, el influjo de la migración y de los capitales chilenos. Al final de la década de 1860, el puerto de Iquique, bajo el impulso del salitre, ya había triplicado su población, alcanzando, en 1871, 12.000 habitantes, la mayoría de los

²⁴ Mesa, Gisbert; Mesa Gisbert, 1997, p. 416.

²⁵ Consultar: Carmen Gloria Bravo, 2000, y de la misma autora: "Caracoles: un capítulo de la historia chileno-boliviana" (manuscrito).

²⁶ Langer (manuscrito).

cuales precedentes de Chile. El mismo fenómeno, en proporción menor, se constata en Tarapacá donde, tres años antes de comenzar la guerra, se hallaban 10.000 chilenos, poco menos que un tercio de los 37.000 habitantes de la provincia.²⁷

Las medidas políticas que acabaron por constituirse en pretexto o causa inmediata del conflicto armado deben ser vistas sobre el trasfondo de la expansión demográfica y de la explotación económica de Atacama y de Tarapacá, promovida, en ambos casos, por el capital internacional a partir de las bolsas de Santiago y Valparaíso. Los factores que precipitaron la guerra fueron, por un lado, la decisión del gobierno boliviano de gravar un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado de Atacama y, por otro, la tentativa peruana de retomar el control monopolista de ese recurso en Tarapacá e incorporarlo a su proyecto de modernización.²⁸ Y, finalmente, el descubrimiento, por parte de Chile, de la existencia de un acuerdo secreto de alianza militar entre Perú y Bolivia.

Una vez deflagrada la guerra, la capacidad de resistencia por parte de Bolivia fue pequeña y sus ejércitos fueron derrotados en el curso de la primera fase; las batallas, por mar y tierra, continuaron por más tiempo entre las fuerzas de Perú y Chile. Aun así, en menos de dos años, los ejércitos chilenos, con un total de 26.000 hombres, consiguieron ocupar una inmensa franja territorial que iba de Antofagasta a Lima. A partir de la ocupación de la capital peruana, la defensa de ese país asumió la forma de guerrilla, con participación de campesinos y comuneros indígenas (Valle del Mantaro, Comas, guerrilla de Cáceres). Con el triunfo de las armas, Chile anexó a su territorio las provincias peruanas de Arica y Tacna, esa última devuelta en 1929, y todo el litoral de Bolivia, país que desde entonces quedó sin acceso al mar. Es casi imposible saber con alguna precisión el costo humano de esa guerra; cifras oficiales dan cuenta de 5.600 muertos del lado chileno, pero si se suman los desaparecidos, heridos y víctimas de enfermedades desatadas por el conflicto bélico, el número de víctimas sube a 15.000. Del lado peruano, los datos son aún más imprecisos, aunque es consenso que las bajas fueron mucho mayores, tal vez el doble de las chilenas, entre 11 y 12 mil, y las de Bolivia alrededor de 2.100.

Los resultados en los ámbitos militar y territorial fueron innegablemente a favor de Chile; sin embargo las consecuencias socioeconómicas se muestran más complejas y ambivalentes. En un primer momento, el control de los depósitos de nitrato representó ganancias fiscales de monta para el país victorioso. La simulación del ingreso potencial que Chile, Perú y Bolivia obtendrían, caso el primero no hubiese conquistado las provincias salitreras de sus adversarios, revela que los países perdedores tendrían duplicado por lo menos sus niveles históricos, y el de Chile sufriría una caída de 80%.²⁹ Aunque sea cierto que la incorporación de Atacama permitió a Chile superar transitoriamente la crisis que amenazaba llevarlo al borde de la falencia al comenzar la década de 1870, concluida la guerra no sólo la industria del salitre quedó en manos extranjeras, como el conjunto de la economía pasó a depender del comportamiento volátil de los precios de ese producto en el mercado internacional, así como el gobierno de los recursos tributarios provenientes de su exportación.³⁰ En síntesis, la dependencia de la economía chilena de un recurso primario que, inicialmente, gozaba de elevada renta diferencial, retardó una vez más la transformación del sistema productivo. Los vínculos entre el conflicto armado y la modernización de la estructura estatal chilena, en consecuencia de la guerra, no fueron de causa y efecto, mas de interdependencia. Si, por un lado, el ritmo y la magnitud de las operaciones militares transformaron la “fisiología del

²⁷ Langer (manuscrito).

²⁸ Sobre el proceso, consultar: González Miranda, 2004, y Gobierno del Perú, 1878.

²⁹ Sicotte; Vizcarra; Wandschneider, 2009.

³⁰ Sobre la crisis y su corolario, consultar: Ortega, 2005, capítulo VI.

Estado” – estimulando, por ejemplo, la expansión de su aparato burocrático hasta volverlo efectivamente nacional –, por otro, la acción rápida y eficaz de la estructura burocrática, bastante capacitada aún antes del conflicto, permitió, en el ámbito civil, la incorporación expedita de las localidades conquistadas por el ejército, lo que, por su parte, contribuyó a la consolidación de los resultados alcanzados por las armas.

A medida que avanzaba el proceso bélico, intelectuales, políticos y periodistas fueron construyendo la justificativa ideológica de esa guerra de conquista. Echando mano de la fórmula sarmientina, el acontecimiento bélico fue interpretado como el avance de la civilización sobre la barbarie del desierto, el triunfo de las instituciones republicanas chilenas contra el despotismo brutal de los gobiernos boliviano y peruano.³¹ Fue, justamente, en el crisol de ese discurso apologético que la imagen del “roto chileno” fue transferida del campo de la barbarie en que se encontraba para el de la civilización. Más allá del impacto económico que la usurpación de la riqueza salitrera tuvo sobre Chile, la participación activa de los sus segmentos populares en la Guerra del Pacífico contribuyó a valorizar la autoestima de los mismos, y la figura del “roto”, apelativo con el cual se aludía antes al marginal e indócil, pasó a constituirse, como la del gaucho en Argentina, en la síntesis del “alma nacional” – fenómeno que, en la posguerra, se constituyó en uno “de los factores que favorecieron poderosamente la progresión casi geométrica de los movimientos reivindicativos y de protesta social”.³²

En Perú y Bolivia, al contrario, la derrota estimuló la emergencia de un discurso crítico del orden social existente. El reclutamiento de la población indígena para defender un país que no sentía como suyo y que le había negado carta de ciudadanía a lo largo de la vida republicana, puso de manifiesto la existencia de un “problema nacional”, el cual pasó a constituirse rápidamente en un tópico de época. Escritores como Manuel González Prada, en Perú, y Alcides Arguedas, en Bolivia, dirigieron sus ataques a la clase dominante, buscando la substitución de los caudillos y plutócratas por una clase dirigente que, apoyada en los sectores medios y orientada por intelectuales, fuese capaz de realizar la unidad nacional. Pero no faltaron quienes entendieron la derrota como una confirmación del carácter degradado de la raza indígena, la cual, en las palabras de Ricardo Palma, “no tiene sentimiento patriótico y ya nace como enemigo de los blancos y de los hombres de la costa”.³³ Así, al contrario de lo que podría esperarse, la catástrofe del Pacífico distanció aún más el país *criollo* de la sociedad indígena en ambos países.

De todas maneras, fue en el ámbito de la política doméstica donde se dieron los cambios más significativos en las repúblicas que perdieron la guerra. En Bolivia, el conflicto bélico creó las condiciones para que el control del Estado, tradicionalmente en manos de caudillos militares, pasase a un grupo de empresarios de la industria minera, cuya ascensión económica se había producido a lo largo del período 1850-1870. La nueva élite, que asumió el poder al concluirse el Pacto de Tregua (1884), modernizó la estructura de transportes, reformó el sistema económico, extinguiendo varios de sus fundamentos coloniales, y, sobre todo, sentó las bases para la estabilidad institucional del país. Fue precisamente la polémica trabada con relación a la dirección que debería seguir la política boliviana con relación a Chile que terminó por configurar el perfil de los dos partidos civiles – Conservador y Liberal – que disputarían el poder a lo largo de la llamada República Oligárquica (1884-1920).³⁴

³¹ Mc Evoy, 2006a. Ver también: Mc Evoy, 2006b.

³² Morris, 1967. Consultar también: Grez Toso, 1995.

³³ Citado por Earle, 2000, p. 82.

³⁴ Klein (manuscrito).

Por último, después de la catástrofe del Pacífico, Bolivia se replegó hacia el interior de su núcleo montañoso cuando, paradójicamente, su economía se integraba al mercado internacional. Bajo tales circunstancias, floreció la doctrina andinista que llegó a identificar la esencia de la nacionalidad con la plataforma histórica, cultural y geográfica del Altiplano, exacerbando la dicotomía entre las regiones occidental y oriental de la República. Y, así, la idea de nación que, en la esfera social, había excluido ora el indio, ora el *criollo*, y casi siempre el mestizo, pasó a discriminar, en el ámbito geográfico, las regiones, al dejar fuera de su configuración simbólica, literaria y cultural las extensas llanuras vecinas del macizo andino. El predominio de una visión esencialista de la nacionalidad, basada en una suerte de fatalismo geográfico, llevó a identificar el Altiplano como la morada de la nación, privando a las culturas de los llanos de la condición de miembros natos. Claro que la Guerra del Pacífico no fue la causa de esa trayectoria, pero ciertamente contribuyó a fijarla al borrar el horizonte marítimo del cuadro de alternativas imaginadas para el desarrollo del país.

La Guerra del Chaco fue, en el siglo XX, el único conflicto armado latinoamericano de grande porte. En la contienda participaron dos países que, en el siglo XIX, habían perdido su condición marítima: Paraguay y Bolivia. Este último, más enclaustrado aún por la geografía, percibía la región del Chaco como posible ruta fluvial hacia el Atlántico. El territorio en disputa se hallaba dentro de un triángulo definido por tres ríos: el Parapetí (Departamento de Santa Cruz), el Pilcomayo y el Paraguay. El Chaco Boreal, área en litigio, era poco habitado debido a los pantanos, a la escasez de agua potable y a la presencia infernal de mosquitos. La interpretación dominante durante mucho tiempo aducía como causa del conflicto el interés por los campos petrolíferos disputados por dos compañías internacionales: la Standard Oil de New Jersey y la Royal Dutch Shell, apoyadas por los gobiernos de Bolivia y de Paraguay, respectivamente.³⁵ Bajo esa óptica, se trataría de una guerra esencialmente imperialista que envolvió en su trama dos Estados pobres y dependientes. En verdad, ni el Chaco Boreal tenía petróleo, ni los campos de hidrocarburos, situados en suelo boliviano, eran parte del territorio en litigio, y, cuando éstos entraron en la mira de los paraguayos, la contienda bélica ya se hallaba en su fase final. Fronteras mal definidas por tratados anteriormente suscritos, coyunturas domésticas agravadas por la crisis de 1929, y la secular aspiración de Bolivia de conectarse con el mar explican mejor los motivos de esa guerra.

A lo largo de la década del veinte se produjeron varios enfrentamientos de pequeños contingentes armados que patrullaban la región, pero todos fueron superados provisoriamente a través de negociaciones directas entre los dos países. En abril de 1932, un avión boliviano de reconocimiento descubrió un depósito de agua dulce (Laguna Chuquisaca) en el Chaco Central, y la expedición enviada para establecer un campamento en la orilla oriental se deparó con la presencia de un fuerte paraguayo construido en el mismo lugar, sólo que bautizado con otro nombre: Laguna Pitiantuta. Pocos meses después, soldados bolivianos atacaron y expulsaron la patrulla paraguaya. El gobierno de ese país interpretó el acontecimiento como una violación del acuerdo de no-agresión estipulado en 1931, y las hostilidades comenzaron.³⁶ En el transcurso del conflicto armado (1932-1935), Bolivia, cuya población era entonces de 3 millones de habitantes, movilizó tres ejércitos y un total de 250 mil hombres; la estratificación de las Fuerzas Armadas reflejaba la de la nación: la oficialidad era criolla blanca, y la tropa, constituida en su mayor parte de indios aymará y quechua, mal preparada y peor abastecida para el tipo de guerra distante de la región montañosa.³⁷ Cerca de 52.400 soldados bolivianos perdieron la vida, una parte considerable por las condiciones inhóspitas del lugar, y 24.000 fueron hechos prisioneros. El costo de la

³⁵ Mesa, Gisbert; Mesa Gisbert, 1997, p. 530.

³⁶ Scheina, 2003, p. 85.

³⁷ Scheina, 2003, p. 103.

guerra para Bolivia fue de 228 millones de dólares, financiados por el Banco Central y por empréstitos negociados con los magnates mineros, una vez que el crédito internacional había sido cortado.³⁸ Paraguay, con una población de 900 mil habitantes, movilizó 100.000 hombres, de los cuales 36.000 murieron y 2.500 fueron prisioneros, y el costo financiero para ese país fue de 128 millones de dólares.³⁹ A pesar de la superioridad numérica de sus ejércitos y fuerza aérea, Bolivia perdió la guerra, en buena medida por la dificultad de abastecer sus líneas, y por la inoperancia de varios de sus jefes militares y políticos. Paraguay, en cambio, además de contar con la acertada conducción de sus altos mandos, supo aprovechar las ventajas de su posición logística una vez que concentraba población y estructura administrativa en la orilla meridional del Chaco, lo cual le permitía transportar con rapidez tropa, agua y víveres al teatro de operaciones. Paraguay ocupó 90% del Chaco y, firmado el tratado de paz, se quedó con 80% del territorio disputado, un saldo positivo de 52.395 millas cuadradas con relación a la extensión del Chaco que controlaba antes de la guerra.

Las consecuencias del conflicto se procesaron dentro de los propios países beligerantes y no trascendieron ni siquiera al ámbito regional. La guerra trajo de vuelta los militares al primer plano de la política doméstica en ambos Estados. Curiosamente, el triunfo revitalizó el mito de la Primera República (1810-1870) como la edad de oro del Paraguay potencia.⁴⁰ Si bien la victoria fortaleció el orgullo nacional de los paraguayos, el saldo fue negativo para su democracia, la cual sucumbió poco después ante la investida de sucesivos golpes militares y regímenes conservadores. En Bolivia, la derrota provocó profundas transformaciones de signo parcialmente distinto: por un lado, cerró un largo ciclo de gobiernos civil-oligárquicos, y, por otro, desató las fuerzas sociales y configuró la mentalidad de los actores políticos que, posteriormente, desencadenarían la Revolución de 1952. El contacto y la necesaria interdependencia que la guerra exigió entre las distintas capas de la sociedad, hasta entonces enclaustradas dentro de rígidas fronteras étnicas, hicieron surgir una nueva conciencia colectiva de espíritu nacionalista. La movilización y la participación activa de la población indígena en la defensa del país generaron, sobre todo entre los sectores campesinos, “un sentimiento de derecho adquirido en el campo de batalla”, que rápidamente se expresaría en demandas por reforma agraria.⁴¹ Los gobiernos militares que se sucedieron realizaron las primeras experiencias de socialismo de Estado, nacionalizaron las empresas petrolíferas y comenzaron a fiscalizar los intereses de las tres mayores empresas productoras de estaño. Ideas nacionalistas y socialistas, antes restringidas a pequeños grupos, pasaron a ser moneda corriente entre jóvenes y excombatientes, y dieron origen a la formación de nuevos partidos, entre los cuales el Movimiento Nacionalista Revolucionario que encabezaría la revuelta popular y asumiría el poder el 9 de abril de 1952.⁴²

Por lo visto hasta aquí, se puede concluir que las mayores guerras latinoamericanas, aunque limitadas, no dejaron de producir consecuencias de amplio espectro, una vez que contribuyeron a cambiar rasgos fundamentales de los sistemas sociales, económicos y políticos vigentes antes de su deflagración. Seguramente que ellas no fueron causa suficiente de las transformaciones apuntadas en los distintos casos, pero no hay duda de que crearon las condiciones para su materialización y, en ciertos casos, configuraron las fuerzas sociales responsables por las mismas. Es posible reconocer hasta hoy el legado de las guerras en varias dimensiones de la vida nacional de los Estados partícipes.

³⁸ Mesa, Gisbert; Mesa Gisbert, 1997, p. 539.

³⁹ Scheina, 2003, p.103.

⁴⁰ Ver, por ejemplo, Juan Natalicio González.

⁴¹ Mesa, Gisbert; Mesa Gisbert, 1997, p. 541.

⁴² Klein, 2003, p. 175.

III. Las marcas de las grandes guerras en el presente

La Guerra del Pacífico dejó cicatrices en las sociedades de todos los países que participaron directamente en el conflicto. La solución al problema de la mediterraneidad pasó a ser la principal reivindicación de Bolivia en los foros internacionales y, desde entonces, configura las relaciones con Chile, las cuales están expuestas a crisis intermitentes, a pesar de los fuertes vínculos económicos y culturales que existen entre ellos. Hace más de medio siglo que ambos Estados no mantienen relaciones diplomáticas, las mismas fueron rotas en 1962 y, después de reatadas durante el interregno de los gobiernos de Banzer y Pinochet, Bolivia volvió a suspenderlas en 1978, y así continúan hasta hoy.⁴³ De todas formas, siempre hubo, en Chile, personas e instituciones, privadas y públicas que abrieron canales de comunicación, reconociendo, si no la injusticia perpetrada contra Bolivia, al menos la legítima aspiración de ese país a tener una salida soberana al mar. La convicción de que sólo así se podrá alcanzar una solución definitiva fue manifestada reiteradas veces por políticos, historiadores, escritores, y, alguna vez, hasta por el propio Pinochet, con áspero pragmatismo: “La aspiración de poseer una salida al mar es común a todos los Estados que se ven privados de ese contacto; la atracción es enorme. Es una fuerza geopolítica que opera siempre que se le presenta la ocasión y que ningún tratado consigue extinguir”.⁴⁴ Y fue precisamente durante las dictaduras de Pinochet y Banzer que, con los acuerdos de Charaña, se avanzó más en ese sentido. Sin embargo, las tentativas de solución fueron dificultadas por el carácter trilateral del conflicto, y por la capacidad del gobierno peruano de oponer resistencia a las negociaciones directas entre Chile y Bolivia, o porque las juzga contrarias a sus intereses o porque comprometen territorios que considera litigiosos. Fue lo que sucedió, en 1976, con relación a la propuesta chilena de ceder a Bolivia una salida al Pacífico a cambio de 5.000 km² de territorio boliviano, próximo a Laguna Colorada, cuyas aguas servirían para abastecer las industrias de cobre chilenas. La intervención del Perú, implicado en un duelo histórico con Chile por la hegemonía en el Pacífico sudamericano, hizo abortar el proceso de negociación.⁴⁵

Recientemente, la emergencia de gobiernos de izquierda y las necesidades creadas por el nuevo contexto regional y mundial han contribuido para que la demanda marítima boliviana comience a ser abordada bajo una perspectiva que, distintamente del discurso nacionalista tradicional, destaca la cooperación y los beneficios colectivos de un eventual acuerdo. El cambio de actitud se advierte en la agenda bilateral de los 13 puntos, acordada entre los gobiernos de Morales y Bachelet, que incorpora el tema marítimo y promueve la distensión a través de un nutrido programa de contactos bilaterales a niveles ministerial, parlamentario, militar, empresarial y estudiantil. La reciente declaración de Morales, por ocasión del Día del Mar, es ilustrativa del nuevo espíritu que anima ese tipo de estrategia: “Al margen de estos problemas históricos, en primer lugar está la integración, y es lógico esperar que, mediante el diálogo directo y bajo el control de nuestros pueblos, se resuelvan estos problemas”. Sin embargo, cabe recordar que la disposición del gobierno no es necesariamente la de la sociedad, la cual, en general, aún nutre profundos rencores con relación a Chile, duda de sus verdaderas intenciones, y no lo considera un vecino confiable. La vigencia de ese sentimiento, con un toque de revanchismo, se hizo notar de manera

⁴³ En 1962, Bolivia rompió relaciones diplomáticas debido a que Chile desvió unilateralmente las aguas del río Lauca, de curso internacional entre los dos países.

⁴⁴ Baptista Gumucio, 1999, p. 8.

⁴⁵ La necesidad de recursos hídricos por parte del norte chileno alentó negociaciones sobre la base de un cambio de “agua salada por agua dulce”, esto es, acceso al mar por fuentes de agua para las poblaciones y actividades económicas de la región.

dramática en la condenación casi unánime de la sociedad boliviana a la iniciativa del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de territorio y puertos chilenos. La caída del presidente, provocada por la guerra del gas, en octubre de 2003, muestra la fuerza mobilizadora y consensual que ostenta el tema marítimo.

Algo semejante acontece en Perú, donde el sentimiento anti-chileno se revela aún más acentuado, tal vez por la extensión que alcanzó la ocupación militar y la estela de depredación y violencias que dejaron los ejércitos chilenos en su marcha por el interior del país. Por eso mismo, la memoria de la resistencia es un capital simbólico que aún produce dividendos en la política interna peruana, alimentando movimientos nacionalistas como el cacerista, y la proyección de caudillos populistas, como Ollanta Humala.⁴⁶ El incidente diplomático provocado por el simple anuncio de un canal de televisión chileno, cuya señal alcanza algunas regiones del Perú, de que transmitiría un documental sobre el conflicto bélico revela hasta que punto la Guerra del Pacífico continúa siendo un tema altamente inflamable para la población peruana, y la consciencia que tienen ambos gobiernos sobre su capacidad de avivar fácilmente el nacionalismo revanchista. En aquella oportunidad, la iniciativa suscitó la inmediata reacción de la cancillería peruana y la exhibición fue cancelada, a pedido de las propias autoridades chilenas que, aunque reconocían el carácter imparcial del programa, pensaron que sería una imprudencia echar más leña al fuego. Por otro lado, la percepción que la opinión pública chilena cultiva sobre Bolivia y Perú tampoco ayuda a aliviar las tensiones: sobrevive hasta hoy una visión chauvinista y prejuiciosa, con frecuencia alimentada por la prensa, la cual, al mismo tiempo que se ocupa de noticiar diligentemente lo que ocurre en dichas repúblicas, carga la tinta en los aspectos que tienden a confirmar el estereotipo de sociedades mendicantes, revoltosas, repletas de delincuentes e indios bárbaros.

En las relaciones diplomáticas de los países involucrados en la Guerra de la Triple Alianza, en cambio, no están presentes demandas de restitución territorial. De todos modos, la consciencia de que cabe una reparación histórica, capaz de restablecer la verdad sobre esa guerra, afecta la política exterior y tiñe las relaciones de Paraguay con sus vecinos del Mercosur, sobre todo con Brasil, visto con particular animosidad por los paraguayos. En la práctica, la exigencia aparece de manera soslayada en el marco de las instituciones regionales y se refiere al hecho de que los países aliados no solamente le deben al Paraguay una compensación moral, sino que todos en conjunto deberían cuidar mejor de las comunidades guaraníes que quedaron divididas por las fronteras fijadas después del conflicto armado.

IV. Los motivos de la paz americana

No obstante el significativo impacto de las grandes guerras sobre los países involucrados, la región latinoamericana, conformada por nada menos que veinte Estados, ha disfrutado de considerable y progresiva paz en el escenario internacional a lo largo de los dos últimos siglos. Exceptuando la Guerra de la Triple Alianza, verdaderamente feroz y exterminadora, el número de muertes en consecuencia de conflictos armados entre los Estados de la región fue mucho menor del que se verifica entre las naciones de Europa y América del Norte, donde se “ha matado mil veces más y a un ritmo más acelerado” y ascendente. América Latina, al contrario, se ha distinguido por la construcción de un sistema intercontinental de

⁴⁶ Durante la campaña electoral, Humala, que al final obtuvo una elevada votación en el primer turno, hizo constantes alusiones a la Guerra del Pacífico y a los territorios perdidos por Perú y Bolivia.

conferencias y tratados para la solución de conflictos mucho antes de que esa práctica se hiciese común o se generalizase.⁴⁷ El tema de la guerra no parece popular ni entre los militares de la región. La investigación, realizada por Centeno a base de revistas especializadas de diez países, revela que del total de artículos publicados a lo largo de más de un siglo, las materias dedicadas al análisis estratégico de posibles conflictos bélicos regionales representan una ínfima proporción. En Argentina, por ejemplo, de los 2.500 artículos de la *Revista del Círculo Militar*, sólo dos tratan de ese asunto, y en Chile únicamente cuatro de 2.790 títulos.⁴⁸

Son varios los factores que han sido propuestos para explicar el pacifismo de la trayectoria interestatal latinoamericana. Para algunos, la tendencia acarrea una marca de nacimiento, y se refiere al hecho de que las guerras de independencia no exigieron la militarización de la sociedad. Por otra parte, el proyecto de construir la unidad americana, desde los tiempos de Bolívar, corrió parejo con las tentativas de instituir los Estados nacionales, lo cual debe haber contribuido para que los países, engendrados por un mismo impulso y casi al mismo tiempo, no se percibiesen entre sí como competidores o enemigos potenciales. En tal sentido, cabe recordar que dos grandes ejércitos, uno encabezado por San Martín, en el sur, y otro por Bolívar, en el norte, fueron responsables, en buena medida, por la liberación de toda la región suramericana, excepto Brasil. En otras palabras, las guerras por la *patria grande* eran parte intrínseca de las luchas locales contra el poder colonial. Más aún, la identidad nacional, vinculada desde el comienzo al sentimiento de pertenencia a la comunidad americana, muy luego se acopló a la consciencia de que no había fuertes motivos materiales que aproximasen los países de la región, ya que, en la visión de las élites modernizadoras, los factores capaces de impulsar el desarrollo – inmigración, capitales, comercio – “sólo podían venir de ultramar”.⁴⁹ Así, mientras la unión de los nuevos Estados iba arraigando en el discurso, la dura realidad material los distanciaba y, de esa manera, las posibilidades de enfrentamientos por razones económicas, sin que mediara el interés de potencias extranjeras por algún recurso estratégico, disminuían considerablemente. Por eso, las guerras interestatales que ocurrieron en la región serán interpretadas casi siempre como guerras imperialistas.

En época más reciente, hay que subrayar el surgimiento de la hegemonía de los Estados Unidos, la cual, además de constituirse en una fuerza amortiguadora del impacto que los conflictos extra-continetales tuvieron en la región, fue un poder moderador de las contiendas interestatales, sin menoscabo de las reiteradas incursiones e invasiones perpetradas en lo que consideraba ser su área de influencia.⁵⁰ Además de la extensión y escasa población de los espacios de frontera entre los países latinoamericanos, también resultó benéfico el hecho de que los nacionalismos o “patriotismos populares” se constituyeron tardíamente, no en oposición a situaciones de dominación extranjera o de conflictos con otros Estados, sino, fundamentalmente, como palancas del desarrollo y de proyectos de industrialización.⁵¹ Cuando se alcanzó esa fase, hacía tiempo que el enemigo imaginado, de quien todo discurso nacionalista echa mano, había encarnado, para toda América Latina, en la figura del Imperio: los Estados Unidos, un poder inabordable militarmente, y para el cual el adversario fue, inicialmente, Inglaterra, luego Alemania y, más tarde, la Unión Soviética. De ese modo, el candente antiimperialismo al sur del Río

⁴⁷ Centeno, 2002, p. 37 y 70.

⁴⁸ Centeno, 2002, p. 78.

⁴⁹ Alberdi, 1998.

⁵⁰ Sobre las numerosas actividades que el Departamento de Estado norteamericano desarrolló para reducir los riesgos de conflictos bélicos en la región, consultar Stuart, 1949.

⁵¹ Sobre las nociones de “protonacionalismo popular” y “patriotismo popular”, consultar Hobsbawm, 1990, p. 63.

Bravo devino, paradójicamente, un antídoto eficaz contra el “nacionalismo agresivo” y, en las condiciones de la “Pax Americana”, de consecuencias relativamente menos catastróficas bajo un punto de vista bélico. Tampoco hubo Estado latinoamericano que, en su recorrido histórico, ejerciese dominio y explotación colonial de poblaciones y territorios situados fuera de su jurisdicción política, no obstante el hecho de que los grupos indígenas estuvieron sometidos a esa condición en el interior de sus respectivos países. En la misma línea de factores que, en el largo plazo, afectaron la curva de las guerras interestatales, ha de mencionarse, finalmente, el cultivo, por una parte importante de la intelectualidad latinoamericana, de una vocación pacifista que atraviesa los dos siglos de existencia republicana.⁵² En síntesis, el anticolonialismo, el antiimperialismo y el pacifismo, bajo cuyos principios se fraguó el discurso de la identidad criolla latinoamericana, mucho antes de la emergencia de los nacionalismos populares o populistas, también hicieron su parte para inhibir los enfrentamientos entre Estados, así como la posibilidad de que potencias de la semiperiferia, como Brasil, Argentina o México, asumiesen, más tarde, papeles de liderazgo geopolítico.

V. Y pur si muove: la paradoja y su carácter especular

En contrapartida, los países de América de Sul, relativamente exitosos en la consolidación de sus soberanías y en la solución de conflictos en el escenario externo, parecen estar más expuestos a la violencia doméstica y a las guerras civiles que los Estados Unidos o las sociedades europeas desarrolladas, donde la tendencia ha sido a la disminución constante de esas amenazas, a medida que se pasa del siglo XVIII al XIX, y de éste al XX.⁵³ No hay duda de que los países de América Latina han sufrido, al igual que otras regiones del planeta, el infierno de guerras internacionales e invasiones extranjeras, pero la mayor parte de los conflictos armados con sus nefastas secuelas han ocurrido, hasta hoy, entre los habitantes de un mismo Estado y dentro de sus propias fronteras.⁵⁴ Basta recordar que si Estados Unidos sufrieron 1.100.000 bajas durante la Segunda Guerra Mundial, México perdió 824.000 personas por causa de la Revolución (1910-1920), y mientras que en la Guerra de Vietnam (1964-74) murieron 54.000 norteamericanos, el número de colombianos que perdieron la vida en razón de “La Violencia” (1948-57) alcanzó a 180.000 personas – cifra muy superior a la suma de las pérdidas sufridas por todos los ejércitos que participaron en las guerras del Pacífico y del Chaco.⁵⁵

En esa misma línea de raciocinio, el interés secundario que acusan los militares sobre la posibilidad de que guerras interestatales surjan en la región ha sido compensado históricamente por una obsesiva preocupación por la “amenaza interna”. La historiografía sobre Fuerzas Armadas en América Latina ha documentado ampliamente la actuación doméstica de los militares, interpretándola como la resultante de condiciones pretorianas o, bajo una perspectiva más radical, como aquella que se esperaría de “fuerzas de ocupación”.⁵⁶ La violencia política, unas veces provocada, otras detenida en los límites del juego estratégico de las superpotencias, se arrastró siguiendo los hilos del tejido social y las

⁵² Ver, por ejemplo, José Montalvo, “Ojeada sobre América”. Otra expresión enfática se plasmó en la obra de Juan Bautista Alberdi, *El crimen de la guerra*. Huelga decir que el pacifismo y altruismo de la visión internacionalista de este autor no se extienden a las poblaciones indígenas, atacadas y denigradas en varios de sus escritos.

⁵³ Sobre la tendencia en Europa, consultar Tilly, 1992.

⁵⁴ López-Alves, 2003, p. 51.

⁵⁵ Scheina, 2003, p. XIV.

⁵⁶ Consultar, por ejemplo, Hobsbawm, 1970, y Petras, 1970.

pulsiones de los conflictos nacionales en cada Estado.

Sobre esa vereda sangrienta se sitúa la experiencia guerrillera. Si bien que, en su origen, la guerra de guerrillas remonta a épocas antiguas, en América Latina se convirtió en una pieza estructural del proceso político, y estuvo presente, con mayor o menor fuerza, en todas las fases de su historia.⁵⁷ Ella se presenta casi siempre como lucha popular, de contenido anti-colonial y anti-imperialista, contra el enemigo externo y los grupos domésticos que colaboran con aquél. Desde las guerrillas de Manuel Rodríguez y Juana Azurduy de Padilla en las luchas por la Independencia, pasando por la resistencia organizada por Benito Juárez contra la invasión francesa, hasta las guerrillas comandadas por el Che, o por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, por los Tupamaros en Uruguay, Montoneros en Argentina, Sandinistas en Nicaragua, Sendero Luminoso en Perú, Kataristas en Bolivia, entre otras, sean de origen rural o urbano, poseen casi todas una complejidad híbrida, lo cual hace difícil caracterizarlas tan sólo como conflictos civiles. La presencia de la guerrilla denota, con frecuencia, insuficiente universalización del Estado, el cual pasa a ser visto por los grupos locales como una entidad extraña y, en consecuencia, carente de sustentación y legitimidad internas, como se constata en el desahogo del montonero uruguayo Aparicio Saravia en 1902:

Estoy convencido de que los enemigos de la nación se aprovechan de la confusión existente sobre la cuestión Estado. Y yo me pregunto todo el tiempo qué diablos es el Estado... porque la patria y el Estado no son realmente la misma cosa. La Patria somos nosotros, los buenos Orientales, aquí en la *montonera*. Y el Estado es un comando artificial, hecho de papel, sin corazón.⁵⁸

Una pista de que el análisis del carácter bifronte y duradero de la guerrilla puede ofrecer claves importantes sobre la configuración de las relaciones entre Estado y sociedad en los países de la región. Sea como fuere, con el fin de la Guerra Fría y el ocaso de la Revolución Cubana, la región perdió su ya menguada relevancia en el tablero geopolítico de los Estados Unidos, y las dictaduras, otrora inculcadas y armadas por el Gran Hermano para la defensa de la Civilización Cristiana Occidental, recularon, después de asombrar a propios y extraños por sus refinamientos de crueldad y desvarío. El alejamiento generalizado, y de cierto modo inesperado, de las Fuerzas Armadas – hasta hace poco un poder fáctico ineludible a la hora de armar los escenarios posibles de la política latinoamericana – no deja de ser un divisor de aguas con relación a nuestro tiempo. Tanto es así que, para las jóvenes generaciones de muchos países, el “golpe militar” pasó a ser una experiencia libresca, aunque los factores que lo propiciaban no hayan perdido fuerza por igual en toda la región, como lo atestigua la creciente visibilidad de las FFAA en la sustentación de algunos regímenes. Y es que las condiciones promotoras del pretorianismo no desaparecieron. Al contrario, hoy, la línea de inestabilidad política se corresponde con la antigua falla que pasaba por Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, países que, desde la redemocratización, fueron responsables por la mayoría de los episodios de gobiernos que no completaron sus mandatos.

Durante las últimas décadas, la violencia cambió de signo, y bajo el título *inseguridad ciudadana* pasó a constituirse en la mayor amenaza a la democracia, por lo menos en la opinión de las élites dirigentes de América Latina.⁵⁹ Aunque la falta de series estadísticas sobre el conjunto de las sociedades latinoamericanas no permita establecer el curso secular

⁵⁷ Ver, por ejemplo, Demélas, 2007, p. 21.

⁵⁸ López-Alves, 2001, p. 163.

⁵⁹ IUI, 2007.

de la violencia criminal, hay indicios suficientes para afirmar que, actualmente, la región transita en sentido opuesto al de los países avanzados y, para algunos, ya exhibe las peores tasas del planeta. En 1976, cerca de 75% de los secuestros ocurridos en el mundo se produjeron en América Latina, a pesar de haber aumentado el dinero aplicado en seguridad privada y pública, al punto de superar los gastos en salud.⁶⁰ En un informe de 2008, el Global Development Network afirma que:

La tasa de criminalidad en América Latina en conjunto es la más alta del mundo, y 4 a 5 veces mayor que la de los países de la OECD. Más de 40% de la población de la región informó que fue víctima de un crimen el año anterior al de la investigación. En muchos países, la criminalidad es la preocupación mayor entre la población. Pero lo que más sorprende es el grado de la violencia en algunos países... El número de muertes por causa de la violencia en América Latina es 200% mayor con relación al promedio de América del Norte, 450% con relación a Europa Occidental, y 30% mayor cuando se lo compara con los del antiguo bloque de países comunistas. El homicidio se ha vuelto endémico entre la población joven masculina, y la probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de homicidio es de 15 a 70 veces mayor que en América del Norte, Asia o Europa (Soares; Naritomi, 2008, Apud Centeno, 2009, p. 11-2.)

En síntesis, parece que vivimos, aquí, una situación inversa a la que emana del contractualismo hobbesiano: mientras los Estados se muestran pacíficos y regulados en el ambiente externo, no consiguen resolver dentro de sus fronteras el problema de la violencia. En la identificación de las causas que explicarían ese estado de cosas, algunos autores han sugerido, a partir de las tesis propuestas por Tilly y otros sobre los países de Europa, que habría una conexión causal entre esas dos realidades. En otras palabras, la incapacidad de los Estados de la región para proteger personas, hacer cumplir las leyes y controlar sus respectivos territorios estaría fuertemente relacionada con el “pacifismo” que exhibieron secularmente en el escenario internacional, es decir, se debería al hecho de que, en los términos perentorios de un autor, América Latina, “es triste decirlo, no luchó suficientes guerras”.⁶¹ Existiría, pues, una correlación negativa entre belicosidad internacional y debilidad doméstica, con las correspondientes secuelas de violencia en esa última esfera.⁶² Para llegar a semejante conclusión, primero se establece que los Estados latinoamericanos son endeble internamente, luego se señala la falta de guerras como causa de ese fenómeno generalizado en el contexto regional. Pero sería posible invertir la dirección de la causalidad y argumentar, igualmente, que la debilidad de los Estados explica la falta de guerras – una inferencia que acaba siendo explícita en ese tipo de análisis. Cabe, entonces, indagar si no estamos delante de un fenómeno especular que nos induce a formular argumentos tautológicos, como fue sugerido en la introducción de este trabajo.

VI. El espejo de Alicia

Una forma de salir de la trama especular sería considerar, como sugiere Centeno, que el *origen* del desarrollo estatal exitoso no se debe a la guerra en sí, sino al hecho de estar asociada al proceso por el cual un grupo se impone sobre otros, concentrando poder y universalizando los fundamentos de su dominación dentro de un territorio. Entonces, la variable política también tendría que trabajar en el mismo sentido de las armas, vale decir, a favor de la unificación estatal, lo cual exigiría la “existencia de una élite dispuesta o forzada a aceptar la pérdida de prerrogativas individuales en función de un bien colectivo” o, en otras palabras, la presencia de una clase dirigente. Tal cosa no habría ocurrido en América

⁶⁰ Favre, 2002, p. 70-1.

⁶¹ López-Alves, 2001, p. 171.

⁶² Centeno, 2002, p. 66.

Latina, donde la guerra nunca consiguió romper el “equilibrio inercial” que existía entre varios poderes e intereses sociales, ni dar a luz, se podría añadir, siquiera una sola revolución burguesa.⁶³

Argumentos de esa naturaleza reiteran, una vez más, la idea de que habría una falla genética en los Estados de la región, la cual les impidió alcanzar lo que fue plenamente logrado por los países del centro en algún lugar del pasado. Semejante lectura de los hechos reduce la ambición explicativa a la tarea de identificar omisiones y lagunas de cara a un modelo de Estado cuyas condiciones de emergencia son irrepetibles. No acierta esa perspectiva aquello que es perfectamente obvio: cuando los países latinoamericanos surgen en el escenario internacional, ni el modelo de Estado es el mismo de los siglos XV o XVII, ni la guerra puede cumplir las mismas funciones que en la época del Tratado de Westfalia. Cuando sucedió la independencia latinoamericana, la distinta configuración del sistema internacional colocaba otras opciones para las élites de la región, al mismo tiempo que cancelaba la posibilidad de que se repitiese la trayectoria trillada por los países europeos. Por tanto, resulta anacrónico y fútil el esfuerzo que, en vez de explicar la implantación del Estado moderno en América Latina bajo circunstancias históricas tan diferentes a las existentes en los siglos XVI y XVII, busca establecer si las condiciones originales estuvieron presentes en la región durante las primeras décadas del siglo XIX y, como no las encuentra, deriva y apunta un rosario de fallas en su configuración.

En ese sentido, cabe recordar que el modelo de Estado, dominante en la época de la Independencia, era distinto del existente en la fase germinal, una vez que incluía, además de la consolidación de un núcleo de autoridad, los dispositivos constitucionales para limitarlo, vale decir: la distribución de poderes, el sistema representativo, la garantía de los derechos individuales y, en el plano económico, las instituciones del capitalismo. Dado que el desafío de implantarlo equivalía no sólo a subir a un tren en movimiento, sino también hacerlo por la parte delantera –el Estado en su configuración liberal –, el acumulo de tareas que había que realizar simultáneamente explica mejor que la “falta de guerras” la impresión de “debilidad” o de proyecto inacabado que acusa la constitución de la estructura estatal en América Latina. Es difícil percibir de qué modo más guerras, en territorios de dimensiones casi siempre muy superiores a los de Europa y poco poblados en grandes extensiones, podrían haber contribuido no solamente a la centralización del poder, como al avance del tipo de Estado, cuya plataforma ideológica se confundía, en la mentalidad de las élites latinoamericanas, con el propio concepto de Civilización. Por eso mismo, no cabe suponer que el papel de las guerras sería el mismo que el protagonizado en los inicios de la Europa moderna. La unificación de Argentina, realizada bajo la Constitución de 1853, muestra justamente como dos configuraciones institucionales disponibles desde el siglo XVIII – el federalismo y la representación fiduciaria – hicieron lo que las armas no habían conseguido imponer en treinta años de enfrentamientos. De la misma manera, el anacronismo implícito en la perspectiva belicista no consigue explicar por qué los Estados latinoamericanos, no obstante las diferencias de grado, se encuentran hoy, por cualquier criterio que se los considere, mucho mejor plantados en el frente interno que en el pasado, sin que la guerra haya contribuido prácticamente nada para ese corolario.

En los estudios sobre los Estados latinoamericanos, la concentración en la lógica del conflicto ha inducido a que se ponga un énfasis casi exclusivo en la variable guerra, cuando la cooperación puede ser tan importante, o más, para entender las características de su desarrollo y consolidación en el largo plazo. Siguiendo esa pista, sería posible encontrar

⁶³ Centeno, 2002, p. 163.

evidencias suficientes para respaldar la idea de que las interferencias más o menos explícita de la potencia hegemónica en las sucesivas reformas de los Estados de la periferia, interpretadas casi siempre como un déficit de soberanía, pueden haber contribuido para su fortalecimiento en el interior de sus territorios y, al mismo tiempo, en el ambiente externo.⁶⁴

A pesar del amplio impacto y relativo reconocimiento que tuvieron las teorías del imperialismo y de la dependencia, en sentido de mostrar la relevancia de la conexión externa para el análisis de los procesos nacionales, hoy estamos teóricamente más preparados para entender tales nexos a nivel económico, mientras que los de naturaleza política continúan siendo encuadrados bajo la óptica heredada de la tradición estado-céntrica, dominante en el pensamiento político moderno. Esa perspectiva limitada, como apunta Held, es responsable por la separación que se observa en los campos de la teoría política y de las relaciones internacionales – un escenario poco promisor para elucidar las razones del descompaso que se verifica, en la trayectoria de los Estados latinoamericanos, entre la paz externa y la violencia interna.

VII. Corolario

En los últimos tiempos se ha especulado sobre una supuesta “corrida armamentista” en la región, la cual podría elevar el riesgo de enfrentamientos interestatales, especialmente entre países con problemas limítrofes latentes. En verdad, el fenómeno “armamentista” no parece ser genéricamente latinoamericano, dado que de los 44 billones que la región aplicó en gastos militares en 2007, más del 88% fue realizado por países suramericanos. Fueron ellos los responsables por los mayores incrementos en el período 2003-2007 – Venezuela (78,53%), Chile (53%), Ecuador (49%) – y entre ellos se encuentran también los tres más altos presupuestos militares: Brasil, Colombia y Chile. En el último lustro, Chile y Venezuela han sido los que más importaron armas.⁶⁵

Sin embargo, las evidencias empíricas están lejos de propiciar consenso, puesto que, con ellas, tanto se puede diseñar un cuadro de “zona militarizada” como de “mar en calma”. Esto se debe, en parte, a la dificultad de establecer criterios objetivos a partir de los cuales se pueda determinar en qué condiciones un proceso de reabastecimiento de las Fuerzas Armadas deja de obedecer a una dinámica convencional y pasa a expresar la lógica de una corrida armamentista.⁶⁶ Bajo un punto de vista retrospectivo, una parte sustancial del aumento de los gastos en ese sector puede ser imputada a la necesidad de recomponer el arsenal después de una década de bajos presupuestos militares y equipos obsoletos. En varios casos, la modernización de las Fuerzas Armadas continúa siendo un *trade-off* entre las esferas civil y militar para mantener ocupados y apaciguados los cuarteles, mientras la definición de las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas y de la propia política de Defensa Nacional en el período Posguerra Fría permanecen en un limbo institucional en prácticamente todos los Estados de la región.⁶⁷ Por otra parte, los polos de mayor reabastecimiento ocurren en países con alguna pretensión y condición de incidir sea en el cuadro regional, a través de nuevas estructuras, tales como, el Consejo Suramericano de Defensa dentro de UNASUL, sea en el plano internacional, participando en misiones de la ONU, o alcanzando el reconocimiento militar estándar de país OTAN, como aspira Chile.⁶⁸

⁶⁴ Ver, por ejemplo, Mitre, 1993.

⁶⁵ Datos obtenidos de Villa, 2008, p. 3-6.

⁶⁶ Ver, por ejemplo, Alsina, s/d.

⁶⁷ Sobre ese tema, consultar, por ejemplo, Marques, 2003, y Fetherston-Dike, 1996.

⁶⁸ Villa, 2008, p. 10.

Este país, por ejemplo, ha participado, en los últimos tiempos, en misiones de paz en Irak, Camboya, Bosnia, India, Paquistán, Oriente Medio y Guatemala y, en el ámbito de la seguridad hemisférica, como grande incentivador del desarrollo de medidas de Promoción de la Confianza Mutua entre los Estados, en las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas.⁶⁹

Tampoco existe motivo para sobresaltos con relación a los países de mayor potencial: Argentina y Brasil. En el primer caso, contrariamente al resto de los Estados, se observa que, a pesar del crecimiento económico, hubo una reducción en el presupuesto militar entre 2004 y 2007, y el gobierno, a través de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, decidió invertir en medidas promotoras de confianza mutua en la región, convencido de los beneficios de la cooperación, e incrédulo respecto a la posibilidad de amenaza externa.⁷⁰ Del mismo modo, la ascensión del Brasil en el escenario internacional, lejos de catalizar tensiones regionales, se hizo sobre la plataforma de su tradicional papel conciliador. Cabe resaltar, en tal sentido, que en la Declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, realizada el 2003 en México, tanto Brasil como Argentina “manifestaron enfáticamente la necesidad de priorizar la lucha contra la pobreza” como el tema más sensible en términos de seguridad.⁷¹

El país que ha suscitado mayor preocupación y atención por parte de la opinión pública y la prensa internacionales es Venezuela, que pasó, entre 1998 y 2002, del 56° al 24° lugar en la clasificación de importadores de armas, comprándolas de Rusia, su principal y prácticamente exclusivo proveedor (93%), en virtud del embargo impuesto por Estados Unidos al régimen de Chávez. En este caso, la búsqueda deliberada de liderazgo y la capacidad de cuestionar y de proponer alternativas regionales a la política norteamericana denotan cierto distanciamiento de su pauta histórica, pero no apuntan en sentido de una ruptura con relación a la tendencia pacifista de la región. La percepción de amenaza se relaciona más bien con dimensiones domésticas (pactos civil-militares), guerrilla, crimen organizado y narcotráfico, todos con potencial de provocar tensiones fronterizas, aunque con pocas posibilidades de derivar en guerras interestatales. Bajo ese prisma, parece una exageración interpretar el aumento en los gastos militares de Venezuela como la quiebra de “un inefable equilibrio estratégico suramericano – concepto de limitada utilidad en el contexto de la existencia de relaciones políticas cooperativas entre los países de la región”.⁷² En síntesis, la afirmación hecha por el ministro de la Defensa Nacional de Chile, Pérez Yoma, en el mismo año de la llegada de Chávez al poder, continúa más próxima de la realidad que el discurso alarmista que ve guerra en cada esquina: “América Latina y Caribe son actualmente acaso la región más estable del mundo, si se considera indicadores como no proliferación y el gasto en defensa; mientras que los principales conflictos interestatales han logrado ser administrados o resueltos a través del diálogo, la negociación y el derecho internacional.”⁷³

Dirigiéndose a *Nuestra América*, José Martí aconsejaba que “los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse”.⁷⁴ Y hoy, más que nunca, el conocimiento mutuo, respaldo del diálogo constructivo, debe constituirse en estrategia privilegiada, si no para alcanzar la paz perpetua, al menos para refrenar los nacionalismos de espíritu belicoso y los excesos de la ideología. Afortunadamente, a lo largo del siglo XX y en lo que va de éste, el espectro de la guerra entre Estados no dejó de alejarse de la tierra latinoamericana. Ese es un

⁶⁹ Pérez Yoma, 1999, p. 57.

⁷⁰ Villa, 2008, p. 22.

⁷¹ Bonilla; Cepik, 2004, p. 45.

⁷² Alsina, s/d.

⁷³ Pérez Yoma, 1999, p. 58-59.

⁷⁴ Martí, 1991, p. 194.

tesoro que debe cuidarse como la herencia más rica para las generaciones venideras, y como el mejor ejemplo que se puede dar a otras regiones del planeta. Sin embargo, la tarea de asegurar esa trayectoria y fortalecerla exige que se encare, con las armas del buen juicio y la justicia, la carga de problemas aún pendientes, cuyo peso, de continuar en aumento, puede comprometer las delicadas alas de la paz.

Referencias bibliográficas

- Alberdi, Juan Bautista. *Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998.
- Alsina, João Paulo Soares. “Corrida armamentista na América do Sul: falácia conceitual e irritante político”. www.seguridadregional-fes.org/upload/4062-001_g.pdf s/d. Consultado em 22/10/2009.
- Baptista Gumucio, Mariano. *Chile- Bolívia: la agenda inconclusa*. Santiago: LOM, 1999.
- Bonilla, Adrián; Cepik, Marco. “Seguridad andino-brasileña: conceptos, actores y debates”, In: Cepik, Marco; Ramírez, Socorro (Ed.). *Agenda de seguridad Andino-Brasileña*. Bogotá: Frederich Ebert, 2004.
- Bravo, Carmen Gloria. “Caracoles: un capítulo de la historia chileno-boliviana” (manuscrito).
- Bravo, Carmen Gloria. *La Flor del Desierto*. El mineral de Caracoles y su impacto en la economía chilena. Santiago de Chile: DIBAM, LOM Ediciones, 2000.
- Bushnell, David; Macaulay, Neill. *The emergence of Latin America in the Nineteenth Century*. Oxford University Press, 1994.
- Cannabrava, Ivan (Embaixador). “O processo de paz Equador-Peru: 1995-1998”. Silva, Raul M. (Org.). *Missões de paz: a diplomacia brasileira nos conflitos internacionais* http://www2.mre.gov.br/missoes_paz/port/capitulo11.html s/d. Consultado em 20/10/2009.
- Centeno, Miguel Angel. *Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America*. The Pennsylvania State University, 2002.
- Centeno, Miguel Angel. “The State in Latin América”. 17/6/2009. <http://www.princeton.edu/~cenmiga/works/The%20State%20in%20Latin%20America.pdf>. Consultado em 29/9/2009.
- Centeno, Miguel Angel; López-Alves, Fernando (Ed.). *The other mirror*. Grand Theory through the lens of Latin America. New Jersey: Princeton University Press, 2001.
- Chiavenatto, Julio José. *Genocídio americano: A Guerra do Paraguai*. São Paulo: Brasiliense, 1993.
- Demélas, Marie-Danielle. *Nacimiento de la guerra de guerrilla*. El diario de José Santos Vargas (1814-1825). La Paz: Plural, 2007.
- Donghi, Tulio Halperin. *Historia contemporánea de América Latina*. Madrid: Alianza Editorial, 1975.
- Earle, Rebecca. *The Return of the Native*. Indians and myth making in Spanish America, 1810-1930. Duke University Press, 2000.
- Favre, Henri. *América Latina frente al desafío del neoliberalismo*. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2002.
- Fetherston-Dike, Natalia. “Política de defensa y transición en Argentina y Chile”. *Análisis FASOC*, Año 11, n. 12, abril-junio, 1996.
- Gobierno del Perú. *Estado de la operación de compra y explotación de las salitreras de Tarapacá por el gobierno del Perú*. Lima: Imprenta La Patria, 1878.
- González Miranda, Sergio. *El dios cautivo*. Las Ligas Patrióticas en la chilenización

- compulsiva de Tarapacá. Santiago: LOM Ediciones, 2004.
- González, Juan Natalicio. *El Paraguay Eterno*. Asunción: Cuadernos Republicanos, 1986.
In: Brezzo, Liliana M.. “La historiografía paraguaya: del aislamiento a la superación de la mediterraneidad”. http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/v.1/v.7_atg3.htm
- Grez Toso, Sergio. *La “cuestión social” en Chile*. Ideas y debates precursores (1804-1902), (Compilación y estudio crítico). Santiago: Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1995.
- Held, David. “Introduction”. In: Held, David (Ed.). *Political Theory Today*. Stanford University Press, 1991.
- Hobsbawm, Eric, “Os golpes militares da classe média”. In: Veliz, Claudio (Org.). *América Latina, estruturas em crise*, São Paulo, 1970.
- Instituto Universitario Iberoamericano (IUI). *Elites Parlamentarias Latinoamericanas, Brasil 2003-2007*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007.
- Klein, Herbert S. “El impacto de la Guerra del Pacífico en la política boliviana” (manuscrito).
- Klein, Herbert S. *A Concise History of Bolivia*. Cambridge University Press, 2003.
- Koshiba, Luiz; Pereira, Denise Manzi Frayze. *Américas: uma introdução*. São Paulo: Atual, 1992.
- Langer, Erick D. “Integración económica en el desierto de Atacama, antes y después de la guerra del Pacífico” (manuscrito).
- López-Alves, Fernando. “The transatlantic bridge: mirrors, Charles Tilly, and State Formation in the River Plate”. In: Centeno, Miguel Angel; López-Alves, Fernando, 2001.
- López-Alves, Fernando. *La formación del Estado y la democracia en América Latina*. Bogotá: Norma López-Alves, 2003.
- Maquiavel, Nicolau. *O Príncipe*. Escritos políticos. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
- Marques, Adriana, A. “Concepções estratégicas brasileiras no contexto internacional do pós-Guerra Fria”. *Revista de Sociologia e Política*, nº 20, jun.2003, p. 69-85.
- Martí, José. *Nossa América*. Antologia. São Paulo: Hucitec, 1991.
- Mc Evoy, Carmen “¿República Nacional o República Continental? El discurso republicano durante la Guerra del Pacífico, 1879-1884”. In: Mc Evoy, Carmen; Stiven, Ana María (Ed.). *La República Peregrina: Hombres de armas y letras en América del Sur, 1800-1884*, Lima: Instituto de Estudios Andinos e Instituto de Estudios Peruanos, 2006a.
- Mc Evoy, Carmen. “Chile en el Perú: guerra y construcción estatal en Sudamérica, 1881-1884”. *Revista de Indias*, v. LXVI, n. 236, 2006b.
- Mesa, José de; Gisbert, Teresa; Mesa Gisbert, Carlos D.. *Historia de Bolivia*. La Paz: Editorial Gisbert, 1997.
- Mitre, Antonio. *El enigma de los hornos*. La Economía Política de la fundición de estaño. El proceso boliviano a la luz de otras experiencias. La Paz: Asociación de Mineros Medianos & ILDIS, 1993.
- Mitre, Antonio. *Nosotros que nos queremos tanto*. Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso boliviano, Santa Cruz: El País, 2008.
- Morris, James O.. *Las elites, los intelectuales y el consenso*. Estudio de la cuestión social y

- el sistema de relaciones industriales en Chile, Santiago: Editorial del Pacífico, 1967.
- Ortega, Luis Martínez. *Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión*, Santiago, DIBAM-LOM, 2005.
- Pérez Yoma, Edmundo. “La defensa nacional de Chile y la globalización”. *Fasoc*, Año 14, nº 4, octubre-diciembre, 1999.
- Petras, James. *América Latina: reforma o revolución?* Buenos Aires: Biblioteca de Ciências Sociais, 1970.
- Scheina, Robert L.. *Latin America's Wars. The Age of the Professional Soldier, 1900-2001*. v. 2, Washington DC: Brassey's Inc., 2003.
- Sicotte, Richard; Vizcarra, Catalina; Wandschneider, Kirsten. “The fiscal impact of the War of the Pacific”. *Cliometrica* (2009) 3: 97-121.
- Soares, Rodrigo; Naritomi, Joana. “Understanding High Crime Rates in Latin America”, GDN Conference, 2008.
- Stuart, Graham H.. *The Department of State. A History of Its Organization, Procedure, and Personnel*. New York: The MacMillan Company, 1949.
- Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992*. Cambridge: Blackwell, 1992.
- Villa, Rafael Duarte. “Corrida armamentista ou modernização de armamentos na América do Sul: estudo comparativo dos gastos militares”. *Estudos e Cenário*, Dezembro de 2008. Observatório Político Sul-Americano. <http://observatório.iuperj.br>. Consultado em 12/10/2009.

Anexo 1

Pérdidas humanas en guerras con participación de potencias europeas, 1618-1953

Guerra	Muertos en batalla	Principal Acuerdo
De los Treinta Años (1618-48)	2.071.000	Tratado de Westfalia
Franco-Española (1648-59)	108.000	Tratado de los Pirineos
Otomana (1657-64)	109.000	Tregua de Vasvar
Franco-Holandesa (1672-8)	342.000	Tratado de Nimwegen
Otomana (1682-99)	384.000	Tratado de Karlowitz
Liga de Augsburgo (1688-97)	680.000	Tratado de Ryswick
Sucesión Española (1701-13)	1.251.000	Tratado de Utrecht
Sucesión Austríaca (1739-48)	359.000	Tratado de Aix-la-Chapelle
De los Siete Años (1755-63)	992.000	Tratados de Paris, Hubertusburg
Otomana (1787-92)	192.000	Tratado de Jassy
Revolución Francesa (1792-1802)	663.000	Tratado de Amiens
Napoleónicas (1803-15)	1.869.000	Congreso de Viena
De Crimea (1853-6)	217.000	Congreso de Paris
Franco-Prusiana (1870-1)	180.000	Tratado de Frankfurt
Ruso-Turca (1877-8)	120.000	Tratado de Santo Estéfano, Congreso de Berlín
Primera Guerra Mundial (1914-8)	7.734.300	Tratados de Brest-Litovsk, Versalles, Saint Germain, Neuilly, Trianon
Sino-Japonesa (1937-41)	250.000	Ninguno: confluyó en la Segunda Guerra Mundial
Segunda Guerra Mundial (1939-45)	12.948.300	Ninguno
De Corea (1950-3)	954.960	Armisticio: no hubo acuerdo

Fuente: Tilly, 1992, p. 165-6.

Anexo 2

Invasiones, intervenciones o bloqueos promovidos por potencias extranjeras en países latinoamericanos, siglo XIX

1829	Guerra México x España
1833	Estados Unidos desembarcan tropas en Buenos Aires
1835-6	Estados Unidos desembarcan tropas en Callao y Lima
1836	Guerra de Texas, México
1837	Guerra de los pasteles, Francia x México
1838-40	Bloqueo francés a Argentina
1845-8	Bloqueo francés y británico a Argentina
1846-8	Estados Unidos x México
1852-3	Estados Unidos desembarcan tropas en Argentina (dos veces)
1853	Estados Unidos desembarcan tropas en Nicaragua
1854	Estados Unidos desembarcan tropas en Nicaragua
1855	Estados Unidos desembarcan tropas en Uruguay
1856	Estados Unidos desembarcan tropas en Panamá
1857	Estados Unidos desembarcan tropas en Nicaragua
1858	Estados Unidos desembarcan tropas en Uruguay
1859	Exhibición de poderío naval de Estados Unidos en Paraguay
1860	Estados Unidos desembarcan tropas en Panamá
1861	Intervención no México por parte de Francia, Gran Bretaña y España
1861-7	Ocupación francesa de México. Guerra Franco-Mexicana
1861-5	Reocupación española de Santo Domingo
1864-6	España x Perú
1865-6	España x países del Pacífico (Perú, Chile, Bolivia, Ecuador)
1865	Estados Unidos desembarcan tropas en Panamá
1868	Estados Unidos desembarcan tropas en Uruguay
1868	Estados Unidos desembarcan tropas en Colombia
1885	Estados Unidos desembarcan tropas en Panamá
1888	Estados Unidos desembarcan tropas en Haití
1890	Estados Unidos desembarcan tropas navales en Buenos Aires
1891	Estados Unidos desembarcan tropas en Haití
1891	Estados Unidos desembarcan tropas en Chile
1894	Estados Unidos desembarcan tropas navales en Río de Janeiro
1895	Estados Unidos desembarcan tropas en Colombia
1896	Estados Unidos desembarcan tropas en Nicaragua
1898	Estados Unidos desembarcan tropas en Nicaragua
1898-9	Guerra España x Estados Unidos, Cuba

Fuente: López-Alves, 2003, p. 70-1.

